

**Voluntarismo versus incentivos <sup>1</sup>****Jorge Vasconcelos**[jvasconcelos@ieral.org](mailto:jvasconcelos@ieral.org)

El sesgo cortoplacista de los últimos años comenzó a pasar factura, particularmente en el ámbito de la infraestructura de transportes y energética. Lo hizo de modo trágico en la Estación de Once. En otro plano, no comparable y vinculado a lo económico, ha comenzado a recortar los márgenes de libertad de la política. Es el caso de la pérdida del autoabastecimiento energético, que deparó un saldo negativo de la balanza de combustibles cercano a los 3 mil millones de dólares en 2011, y amenaza con ampliarse en este 2012. Así es como las cuestiones de largo plazo irrumpieron en la agenda inmediata. Los desafíos son de tal magnitud que, quizá por esa misma razón, invitan a cambiar el centro de gravedad de las políticas, pasando de decisiones muchas veces voluntaristas e inefectivas a un enfoque basado en los incentivos y en mayor transparencia en la asignación de recursos públicos.

Muchos ejemplos avalan que “el camino del infierno está plagado de buenas intenciones”. Parafraseando en sentido económico, podría afirmarse que “el camino de la desinversión está plagado de malos incentivos”. Cualquier decisión que se adopte en función de revertir el deterioro de la infraestructura deberá ser evaluada según contemple o no incentivos para aumentar la producción y/o mejorar los servicios a los usuarios. A su vez, cuando se trate de actividades monopólicas, la profesionalidad y transparencia de los organismos de control será imprescindible.

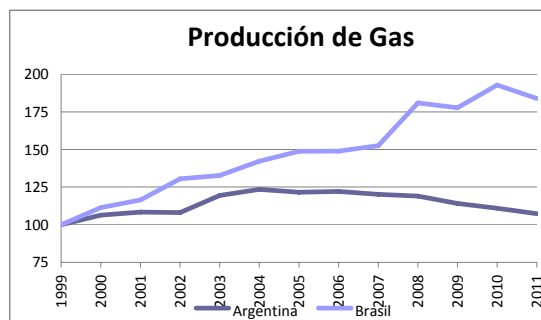
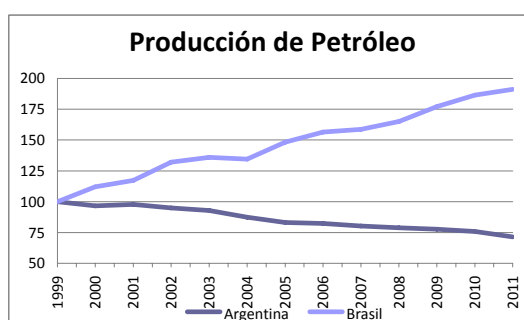
<sup>1</sup> Nota publicada en el diario La Voz del Interior el 4 de Marzo de 2012



Malos incentivos se producen cuando más del 80 % de la facturación de una empresa depende de subsidios. Esto inevitablemente lleva a que los concesionarios centren sus esfuerzos en mantener aceitados los vínculos con los funcionarios que tienen decisión sobre esas partidas presupuestarias, pasando a ser la satisfacción al cliente una variable residual de la gestión. Más si los organismos reguladores fallan en el cumplimiento de su misión.

Fuera del área de los servicios públicos, otro ejemplo de malos incentivos ocurre cuando en el mercado conviven distintos precios por un mismo bien. Es el caso de los combustibles, en donde la brecha de precios puede alcanzar hasta 5 a 1, según se trate de gas importado u originado en los pozos locales. Para el petróleo la diferencia de valores se ha estado cerrando en los últimos años, pero todavía es significativa como para que, una empresa con yacimientos en otros países además de la Argentina, tenga suficientes motivos como para invertir proporcionalmente más en el exterior si es que la relación precios/costos le resulta más favorable.

En gas y petróleo, el problema se agrava por el hecho que en nuestro país los yacimientos en operación son antiguos y se encuentran, en general, en la curva descendente de su capacidad de producción.



Una comparación con Brasil ilustra sobre la magnitud del impacto que tienen los dos efectos combinados (malos incentivos y decaimiento de los pozos). Si tomamos 1999 como año base, se tiene: a) en petróleo, la Argentina registró para 2011 una caída en la producción de 28,6 %, al tiempo que para Brasil se anota un aumento de 91,1 %. b) en



gas, la Argentina muestra una leve mejora respecto de 1999, de 7,3 %, pero empalidece frente al incremento de 84 % verificado en Brasil.

Con el precio del barril de petróleo por encima de 100 dólares en el mercado internacional, la floja performance de la Argentina empezó a reflejarse en dónde más duele a éste y a cualquier gobierno, la escasez de divisas. La balanza comercial energética pasó a terreno negativo en 2011, por 3 mil millones de dólares, rojo que habrá de ampliarse en 2012.

Los proyectos vinculados con infraestructura tienen en común el hecho que los resultados no se ven en el corto plazo, sino luego de años y años de inversiones y de continuidad en las políticas. Pero en algún momento hay que empezar.

Si los incentivos se alinean a favor de la producción y de la mejora de servicios, la obtención de los fondos necesarios para la inversión no debería ser un problema en el contexto actual de la economía mundial. La tasa de interés en los mercados internacionales es cercana a cero. Hay un “tsunami de liquidez” según la expresión de la presidenta de Brasil, originado en la expansión monetaria que vienen llevando adelante los bancos centrales de los países desarrollados. Esa expansión alcanza a nada menos que 5 millones de millones de dólares desde 2008 hasta el presente, equivalente a multiplicar por 11 el PIB de la Argentina.

De hecho, los primeros dos meses de 2012 han estado signados por el retorno de la liquidez a los mercados, permitiendo que Bolsas como la de Brasil recuperen en lo que va del año prácticamente todo el terreno perdido en 2011. No es el caso de la Argentina, en dónde el Merval cayó 30 % el año pasado y hasta ahora ha recortado sólo un tercio.

Ocurre que, en el terreno macroeconómico, la situación fiscal de la Argentina se ha seguido deteriorando según los últimos datos (los gastos suben a un ritmo 7 puntos porcentuales superior al de los ingresos); para la producción industrial han comenzado a aparecer guarismos negativos, y lo propio está ocurriendo con los indicadores de compra-venta de viviendas; el gobierno no ha logrado convencer acerca que una pauta de 18 % es razonable para los salarios; la brecha cambiaria se mantiene en torno a 8 %.



El riesgo país de la Argentina (medido por el costo de los seguros contra default) se ubicó en la última semana en torno a los 830 puntos básicos, superando a Venezuela (750 puntos) y multiplicando por 6 el guarismo correspondiente a Brasil (140 puntos). El sector público nacional no enfrenta problemas vinculados con el pago de la deuda, y de hecho los recientes anuncios de la Presidenta en la apertura de sesiones del Congreso confirman algo anticipado aquí el año pasado, en el sentido que se recurriría a más reservas del Banco Central modificando la Carta Orgánica. Pero ese mecanismo no está al alcance de las provincias. Ni tampoco del sector privado, que es el que podría liderar el proceso de inversiones en caso de un cambio en las reglas de juego. Para las provincias y el sector privado el riesgo país sigue siendo un indicador relevante. Y el gobierno nacional debería tomar nota.